

ÍNDICE AI: AFR 16/20/95/s
20 DE DICIEMBRE DE 1995

BURUNDI: ¿CUÁNTAS PERSONAS MÁS TIENEN QUE MORIR ANTES DE QUE INTERVENGA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL?

Todos los meses, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se cobran más de mil víctimas, pero el mundo continúa ignorando estas atrocidades, ha dicho Amnistía Internacional hoy.

«Más de 100.000 personas han muerto en Burundi desde que estalló la actual guerra civil en octubre de 1993, pero, con su silencio e inactividad, la comunidad internacional ha seguido defraudando a las víctimas», ha dicho la organización de derechos humanos.

Desde comienzos de noviembre de 1995, han muerto más de 1.300 personas. Amnistía Internacional está poniendo de manifiesto los homicidios de los que se ha informado desde entonces, pero es tristemente consciente de que se han cometido más matanzas de las que no se ha informado en las provincias de Bubanza y Cibitoke, inaccesibles, donde los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes se han intensificado durante 1995. La mayoría son víctimas desarmadas, mujeres, niños y ancianos.

Según Amnistía Internacional, «el gobierno se ha mostrado incapaz de impedir que sus fuerzas de seguridad maten a civiles desarmados y lleven a cabo otras violaciones de derechos humanos», ha dicho Amnistía Internacional.

La mayoría de las víctimas de las matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad son miembros del grupo étnico hutu, del que extrae su apoyo el partido político mayoritario, el Frente por la Democracia en Burundi, del presidente Sylvestre Ntibantunganya. Por ejemplo, el 14 de noviembre, las fuerzas gubernamentales rodearon Gasarara en el distrito de Kanyosha, provincia de Bujumbura Rural, y mataron al menos a 430 civiles desarmados, casi todos hutus. Los soldados también saquearon las propiedades e incendiaron las casas. Se han recibido informes de que a algunos civiles les engañaron para que se agruparan en la escuela, aparentemente por su propia protección, y después los dispararon o pasaron a la bayoneta.

En una carta al gobernador provincial con fecha del 20 de noviembre, el administrador del distrito de Kanyosha dijo que había contado 421 muertos: 40 hombres, 73 mujeres, 165 chicos y 143 chicas. Según los informes, una investigación realizada por agentes de seguridad determinó que habían muerto al menos 430 personas, mientras que otras fuentes afirman que se ejecutó extrajudicialmente al menos a 500 personas y que muchos otros «desaparecieron». El resultado de la investigación no se ha hecho pública.

Para Amnistía Internacional, «sólo cuando los agentes de

seguridad rompan su práctica habitual de ocultación, se acabará el ciclo de impunidad y los responsables quedarán a disposición judicial».

Según los informes, entre el 6 y el 7 de diciembre, las fuerzas gubernamentales mataron ilegítimamente a casi 300 civiles desarmados, la mayoría hutu, en los suburbios de Mutanga-nord, Kiriri, Gihosha y Kanyosha. Al menos 270 de estas personas murieron en la colina Sororezo a manos de soldados que emplearon armas automáticas, proyectiles y helicópteros armados. La matanza se produjo después de lo que las autoridades dijeron que habían sido enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes pertenecientes al Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, dominado por los hutu. El Consejo Nacional ha negado estar implicado en los ataques. Algunos de los ataques de las fuerzas gubernamentales parecen una continuación de los intentos de las fuerzas de seguridad dominadas por los tutsis, de librar a Bujumbura de hutus.

Algunos grupos armados hutus también han matado a decenas de tutsis. Por ejemplo, una banda armada atacó el campamento de Campazi de personas desplazadas del grupo étnico tutsi en el distrito de Muruta, provincia de Kirundo y mataron a más de 40 personas. Algunas de las matanzas cometidas por la milicia tutsi se han llevado a cabo con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL

Se recibieron informes de más muertes en el distrito de Kanyosha el 26 de noviembre cuando unos soldados atacaron a un grupo de jóvenes que estaban jugando al fútbol en una escuela primaria de Nyamaboko. Según los informes, los soldados acusaron a un joven de Rumonge de pertenecer al grupo que había saboteado una central eléctrica en Rumonge. Lo golpearon y lo abatieron a tiros. Los demás jóvenes huyeron despavoridos y los soldados los persiguieron. Después los soldados recorrieron violentamente la zona y mataron a unas 500 personas.

«Es una tragedia que la comunidad internacional, entre ellos los diplomáticos extranjeros y los representantes de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, se haya convertido en un espectador impotente. Aunque la mayoría de las matanzas han sido cometidas por las tropas gubernamentales, cuando se las critica, las autoridades burundesas se quejan de que se difama al ejército», manifestó a Amnistía Internacional un observador desplegado en Bujumbura.

Los grupos armados tutsis y hutus parecen haber entablado una competición para matar a un gran número de civiles que presuntamente apoyan a sus rivales. El 1 y el 2 de noviembre por la noche, una banda armada abatió a tiros al a menos cuatro personas e hirió aproximadamente a 20 en Buyenzi, suburbio de Bujumbura, la capital.

Los miembros de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados continúan actuando contra miembros destacados de la sociedad de

Burundi. Por ejemplo, la tarde del 2 de diciembre, los soldados se llevaron al menos a cinco hutus en el suburbio Mutanga-Nord de Bujumbura. Entre ellos estaba Elie Ndikumana, alto cargo del Ministerio de Obras Públicas y Equipamiento, el doctor Gaspard Nzikobanyanka, Nestor Katihabwa, estudiante universitario, Sylvestre Niyonzima y un vigilante nocturno llamado Donatien. Algunos días más tarde se encontraron sus cuerpos y el de una persona sin identificar cerca del aeropuerto de Bujumbura. Aparentemente habían sido ejecutados extrajudicialmente.

Durante la operación de contrainsurgencia del 6 al 7 de diciembre, las fuerzas gubernamentales también atacaron las casas de varios altos cargos hutus, entre ellas las de Augustin Nzojibwami, secretario general de Frente por la Democracia en Burundi, Fabien Sagatwa, secretario de Estado de Seguridad y Antoinette Bazikwankana, ex alto cargo de la Presidencia.